JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tenjo, Cundinamarca, siete de julio del año dos mil veinte.

Se procede a decidir la **ACCIÓN DE TUTELA** instaurada por **COLFONDOS S.A.** contra la **ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO**.

I. ANTECEDENTES:

La sociedad demandante, mediante apoderado judicial, formula acción de tutela en contra de la autoridad accionada con el objeto de que se le ampare el derecho de petición ya que a nombre de su afiliado, **ARGEMIRO SANTANA CASTAÑEDA**, solicitó el 25 de febrero de 2020 se promulgara el reconocimiento y pago del cupón principal del bono pensional en calidad de emisor y el envió de copia de la resolución o acto administrativo a cargo de esa entidad.

1. TRAMITE ADELANTADO.

Recibida la demanda, se admitió por auto del primero de julio ordenando oficiar a la accionada con el fin de verificar los antecedentes del asunto. En la misma providencia se ordenó convocar como tercero interviniente al señor **ARGEMIRO SANTANA CASTAÑEDA**.

2. INTERVENCIÓN DE LA DEMANDADA.

La accionada, mediante su representante legal, se opuso a la demanda argumentando la configuración de un hecho superado porque emitió la respuesta a la solicitud teniendo en cuenta las indicaciones para radicar documentos por medio de la página web, debido a la emergencia sanitaria, por medio de oficio con el que se remitió y adjuntó el soporte documental para el reconocimiento y respectivo pago del bono pensional capitalizado a abril del 2020, documentación que fue radicada el 9 de junio del 2020 en la página web quedando registrado con el radicado de COLFONDOS número 200609-001438.

dar continuidad al proceso, según lo manifestado por el exfuncionario ARGEMIRO SANTANA CASTAÑEDA.

3. PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.

3.1. Copia del oficio BON-11123-02 de fecha 25/02/20 mediante el que la Coordinadora de Bonos Pensionales de COLFONDOS solicita en representación del afiliado SANTANA CASTAÑEDA ARGEMIRO, la expedición de la resolución que ordena el reconocimiento y pago del cupón de bono pensional y el registro de la redención a través de la plataforma autorizada, remitiendo copia del comprobante de pago;

3.2. Copia del oficio SDI.210.347-090620 de fecha 09 de junio de 2020 por medio del cual se aportan anexos: a. Resolución Administrativa 059 del 2020 del 06 de abril de 2020 “Por la cual se da reconocimiento y pago del cupón de bono pensional”; b. Resolución Administrativa 062 del 2020 del 06 de abril de 2020 “Por la cual se da reconocimiento y pago del cupón de bono pensional”; c. extracto de Banco lombia cuenta corriente número 34511941282 con transacción a favor de COLFONDOS PENS OBL los días 14 y 16 de abril de 2020.

Vistos los antecedentes que preceden, es del caso entrar a decidir, para lo cual ha de tenerse en cuenta las siguientes,

II. CONSIDERACIONES.

La tutela es una acción de carácter extraordinario a la que tiene acceso cualquier persona, sin ningún distingò o calidad con la condición de ser la titular del derecho fundamental alegado como violado, ante una conducta de acción u omisión de autoridad o particular que vulnera o amenaza un derecho fundamental individual.

1. PROBLEMA JURIDICO.

Se trata de establecer si la demandada ha vulnerado el derecho fundamental de la sociedad COLFONDOS S.A. y por contera el derecho del señor ARGEMIRO SANTANA CASTAÑEDA. al omitir dar respuesta a la petición radicada el 25 de febrero de 2020.

Para ello se examinará las reglas establecidas en la jurisprudencia constitucional para la protección del derecho fundamental de petición y

2. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION.

El derecho de petición se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en la Ley 1437 de 2011, sustituida por la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición consagrando que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Mediante este derecho es posible solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

En cuanto a los términos para resolver una petición el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 publicado el 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, señala que para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se ampliarán, así: *“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.”*, es decir que como regla general el plazo para resolver una petición es de treinta días siguientes a su recepción, y por excepción las peticiones de documentos y de información lo mismo que las consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo deben resolverse dentro de los plazos especiales señalados en la norma.

La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que los parámetros básicos para la procedencia del derecho de petición, son los siguientes:

los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) *El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

c) *La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

d) *Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

e) *Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.*

f) *La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.*

g). *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.*

distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.”¹

Así la respuesta a la petición debe cumplir, en concreto, los siguientes requisitos: a. oportunidad; b. ser puesta en conocimiento del peticionario; y c. resolverse de fondo con claridad, precisión, congruencia y consecuencia con lo solicitado.

Es de advertir que en la invocación al derecho de petición lo que se debe analizar es si la petición hecha fue oportuna y debidamente contestada dado que el derecho de petición no obliga a que deba ser resuelta favorablemente pues ello corresponde definirlo a la entidad o persona a quien se le dirige la solicitud, es decir que la respuesta no necesariamente será acceder a las pretensiones que se le hacen, luego el derecho se satisface cuando se le da respuesta de fondo a la petición²; así lo reiteró la Corte señalando lo siguiente: *“Es importante resaltar que obtener una respuesta efectiva al requerimiento presentado ante la entidad o el particular, no implica que la misma sea favorable a sus intereses, en otras palabras, “la respuesta no implica aceptación de lo solicitado (...)”*.

3. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.

En el presente asunto, la accionante el 25 de febrero de 2020 radicó, en representación del afiliado **SANTANACASTAÑEDA ARGEMIRO**, ante la **ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO** una solicitud, para obtener: a. la expedición de la resolución de reconocimiento y pago del cupón de bono pensional; b. el registro en la plataforma web del sistema de bonos pensionales de la redención como contribuyente o emisor; c. remitir copia del comprobante de pago.

Las pruebas nos informan que el 9 de junio con el oficio SDI.210.347-090620 se dio respuesta a la solicitud adjuntando los actos administrativos 059 y 062 de 2020 de reconocimiento y pago del cupón de bono pensional, comprobante de transferencia electrónica realizada los días 14 y 16 de abril de 2020 y la información de haber realizado en la plataforma de Oficina de Bonos Pensionales el registro para el señor **ARGEMIRO SANTANA CASTAÑEDA**, quedando comprobado de esta manera que al momento en que se radicó la acción de tutela el derecho de petición de la demandante no se encontraba vulnerado ya que

la **ALCALDIA MUNICIPAL** había dado respuesta a la solicitud de manera congruente con lo pedido.

En consecuencia, el juzgado habrá de negar la protección del derecho fundamental de la accionante.

Por lo expuesto, el **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TENJO** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR la acción de Tutela impetrada por la sociedad **COLFONDOS S.A.** para la protección de su derecho de petición.

SEGUNDO. Notifíquese lo aquí dispuesto a las partes accionante y accionada, lo mismo que al tercero interviniente, en la forma establecida en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. En caso de no ser impugnado el presente fallo remítase la demanda y la sentencia a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

CONSUELO DEL P. DIAZ ROBLES

Consuelo del P. Díaz Robles